

Madrid — No hizo falta que los principales partidos políticos leyeran las conclusiones de una reciente encuesta publicada por el «International Herald Tribune», según la cual el problema que más preocupaba a los españoles por encima de una amenaza de guerra, de la delincuencia o de las armas nucleares, es el desempleo. Ya habían decidido, mucho antes, conceder un protagonismo especial en sus campañas electorales a los aspectos económicos. No en balde la credibilidad del Gobierno que salga de estos comicios se jugará en este terreno.

Convencidos de ello, los partidos han echado el resto a la hora de presentar sus ofertas económicas e incluso algunos, con la complicidad que les permite sa-

ber que nunca las tendrán que poner en práctica, han ofrecido el oro y el moro.

Paro ha sido probablemente la palabra que más veces han repetido los políticos durante la campaña electoral. Y ante el problema, la oferta. Una oferta que nos ha venido a través de una apasionante puja por ver quién da más empleo. El PSOE está dispuesto a crear 800.000 puestos de trabajo en cuatro años; el PCE, un millón, y UCD, que no quiere dar números —tal vez porque ya una vez no le salieron las cuentas— no se compromete con ninguna cifra, pero se muestra dispuesta a crear tanto

El paro, caballo de batalla

empleo como el que más. Alianza Popular, en pleno farol, y asumiendo de lleno las reivindicaciones de los empresarios, confía en esa palabra mágica que es la flexibilización —flexibilización de plantilla, claro— para crear cuantos empleos hagan falta.

Por vez primera, los impuestos han ocupado un importante protagonismo en unas elecciones españolas, tal y como ocurre en la mayor parte de los países occidentales. Y es que la promesa de reducir impuestos es una tentación demasiado grande y fácil para un político. Aunque, después, a la hora de la verdad, no sólo no se reduzcan sino que se

augmenten. Pero España no es como esos países occidentales, donde la oferta de reducir impuestos es algo consustancial a la propia campaña electoral.

Aquí, aún no hemos terminado la reforma fiscal y ya hay un partido, Alianza Popular, que no sólo promete reducir, sino, incluso, suprimir algún impuesto, como el del Patrimonio.

UCD y CDS a lo más que llegan es a adquirir el compromiso de no incrementar algunos impuestos, al tiempo que buscan en el Impuesto de Valor Añadido (IVA) unos nuevos recursos fiscales. Solamente el Partido Comunista incluye en su programa la necesidad de aumentar la ten-

dencia actual de la presión fiscal.

La lucha entre un modelo de Seguridad Social público y otro privado se presenta también de forma nítida y clara entre las distintas ofertas electorales. No es, por otra parte, más que la reproducción de lo que los distintos partidos piensan que debe ser el papel del sector público en la economía. AP y UCD no se complican las cosas en este tema y afirman simplemente que están por la libertad de empresa. Aunque el partido de Landelino matiza que «en el sector privado».

A pesar de todo, la económica ha sido una oferta variada, pero prudente. Tan prudente que si el Partido Comunista llegara al poder apenas nacionalizaría la Telefónica y las empresas eléctricas.